

Incursiones proletarias por las brechas de la propiedad. Ocupaciones de fábricas y experiencias de control obrero. Chile, 1967 – 1970

Proletarian incursions for the gaps in the property.

Factory occupations and worker control experiences. Chile, 1967 – 1970

Luis Thielemann Hernández¹

Recibido: 25 de noviembre de 2019 - Aceptado: 5 de febrero de 2020
Received: November 25, 2019 - Approved: February 5, 2020

Resumen

Las tomas de fábricas por parte del movimiento obrero y la militancia revolucionaria en Chile, fue una característica desde el inicio del Gobierno de Allende. En este artículo se estudian esta práctica en los años anteriores a dicho período (1967 - 1970), en su ascenso difuso en algunas luchas obreras hasta su masificación en un movimiento obrero radicalizado. Se propone que la difusión de la práctica de las tomas de fábricas tuvo diversos motivos, como su utilidad en la negociación de una huelga o la defensa de los trabajos ante la quiebra de la empresa, entre otras, pero que en común expresó una radicalización obrera, permitió una masificación proletaria del movimiento obrero y popular durante las tomas, y el descubrimiento en la experiencia de la toma de alternativas transformadoras a la relación laboral capitalista. Así, la extensión de las tomas de fábricas, lejos de ser frutos de una agitación ideológica externa del movimiento, consistió en una elaboración en medio de luchas sociales para definir las a favor de la clase obrera. Fue la utilidad concreta de la toma, más que su valor simbólico, la principal razón de su difusión notoria desde 1967, tres años antes del triunfo electoral de la Unidad Popular.

Palabras Clave: Toma, Movimiento Obrero, Sesentas, Chile

Abstract

The takeover of factories by the labour movement and the revolutionary militancy in Chile, was a characteristic of the Allende government from the beginning. This article studies this practice in the years prior to that period (1967 - 1970), in its diffuse rise in some workers' struggles until its massification in a radicalized labour movement. It is proposed that the dissemination of the practice of factory takeovers had various reasons, such as its usefulness in negotiating a strike or defending jobs in the event of the company's bankruptcy, among others, but that in common it expressed a worker radicalization, allowing a proletarian massification of the labour and popular movement during the takeovers, and the discovery in the experience of the takeovers, of transforming alternatives to the capitalist labour relationship. Thus, the extension of the factory takeovers, far from being the fruit of an external ideological agitation of the movement, consisted of an elaboration in the midst of social struggles to define them in favour of the working class. It was the concrete utility of the takeovers rather than its symbolic value, the main reason for its notorious dissemination since 1967, three years before the electoral triumph of the Unidad Popular.

Keywords: Takeover, Workers Movement, Sixties, Chile

1 Chileno, Doctor en Historia, Académico Escuela de Historia Universidad Finis Terrae, Santiago de Chile.
Correo electrónico: lthielemann@uft.cl

Introducción

Existe una amplia serie de estudios sobre los procesos de tomas y expropiaciones de centros productivos, principal pero no únicamente fábricas y talleres industriales, ocurridos durante el gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular (1970 – 1973; en adelante, UP) (Entre los trabajos pioneros, destaca Winn, 2004; entre los más recientes Schlotterbeck, 2018). Estas acciones llegaron a constituir instituciones de coordinación y activismo revolucionario, denominados Cordones Industriales, y que actuaron en el momento más álgido del trienio de la UP (a partir de octubre de 1972) a modo de contraofensiva a los paros patronales y de la minería del cobre. En ellos, se pudo observar un movimiento con fuerte presencia proletaria de base, es decir, no únicamente de trabajadores contratados y militantes, sino de un masivo “universo proletario”: sujetos identificados con la causa obrera, como estudiantes, dueñas de casa, campesinos cercanos, cesantes o incluso el lumpen; los que se articularon en torno al centro productivo tomado y bajo un discurso revolucionario (Gaudichaud, 2016). Aunque la oleada de ocupaciones de centros productivos desatada en 1970 apenas Allende llegó a la presidencia fue un hecho sorpresivo en su masividad e importancia, esta no nació de la nada, sino que venía creciendo por la base desde algunos años antes.

Mientras en la región y globalmente, los estudios sobre las ocupaciones de fábricas en la década de 1960 y 1970 han crecido (sobre Argentina, por ejemplo, ver Etchemendy, 2010; Balvé y Balvé, 2005; Slatman, Rodríguez, y Lascano, 2009; Sobre Francia, el clásico de Kergoat, 2008; y el más reciente de Seidman y Pérez Pérez, 2018; sobre los casos italianos, ver Edwards y Ebrary, 2010; Wright, 2017), en Chile los mismos fenómenos han permanecido en la opacidad. En la historiografía dedicada a dicha región, se ha desconocido la radicalidad obrera previa al gobierno de Allende, y cuando ha existido se ha considerado un fenómeno de dirección política, no original (Valenzuela, 2013, pp. 70-78). Eso también es válido para cierta historia social, muy influenciada por la ciencia social del período que veía al movimiento obrero urbano como un grupo moderado, peticionista y despolitizado, a diferencia de los campesinos y pobladores que para 1970 llevaban varios años practicando las ocupaciones de terrenos y expresando una creciente radicalidad en las formas. Así, las tomas de fábricas desatadas desde noviembre de 1970, fueron consideradas un fenómeno producto del ascenso de Allende, o bien, después, una respuesta desde la base a la ofensiva patronal del mes de octubre de 1972; ambas como sorpresas no contempladas en la estrategia de la izquierda (Angell y Moroni, 1969; Faletto y Ruiz, 1970; Salazar Vergara, 2006; 2014). Hasta el momento, conocemos muy poco cómo se familiarizaron antes de 1970 los obreros y militantes de base con la práctica de toma de fábricas, pero, más importante, cómo es que la identificaron como una medida revolucionaria y también parte de la misión de la Unidad Popular en el poder, en tanto “gobierno de los trabajadores”.

En este estudio se llaman “tomas” a todo tipo de ocupación de los establecimientos laborales por parte de los trabajadores y en abierto desafío a sus propietarios y controladores. Algunas de las tomas que se analizan tuvieron motivos defensivos y tenían un carácter de “rehen” en la negociación de un conflicto laboral; otras, en cambio, dieron forma a experiencias de “control obrero”, en las cuales la ocupación significaba una apropiación de la empresa. Otras formas de “control obrero” que se mencionarán surgieron de compras colectivas, formación de cooperativas, u otros medios más o menos negociados con los antiguos propietarios. Estas fueron las denominadas “empresas de trabajadores”. Otro concepto que es necesario precisar antes de seguir es el de radicalización. Con dicho término, aplicado al movimiento obrero, identificamos el proceso de aprendizaje y cre-

cimiento en identificación clasista de dicha referencia social, y que se desarrolla en relación a una agudización de la lucha de clases y en prácticas cada vez más explícitamente antagónicas. La radicalización del movimiento obrero es un proceso principalmente de masificación de sus prácticas, es decir, en que más allá de la huelga contenida y normalizada, se tendió cada vez más a movilizaciones de masas como argumento. Así, dentro y fuera de la fábrica intervino crecientemente el “universo proletario” en torno a los trabajadores contratados cuando estos abrían un conflicto; y, cuando se produjeron tomas, estos utilizaron las instalaciones tomadas como base de operaciones, sedes sociales, entre otras confusiones heréticas. Toma, masividad y radicalidad son conceptos fuertemente imbricados en la cotidianidad del movimiento obrero de los últimos años de la década de 1960.

Como veremos en este escrito, la extensión en las bases obreras de la práctica de ocupación del establecimiento, observable notoriamente desde 1967, nació primero como una forma de fortalecer la posición propia en la negociación salarial durante una huelga, extendiéndose rápidamente (Thielemann, 2018). Posteriormente, en el contexto de la crisis económica general de las medianas y pequeñas industrias hacia fines de la década de 1960, en un ambiente de lucha salarial que se había vuelto frontal y antagónica desde 1965, y con una CUT que, desde 1967, dejó en manos de las bases la elaboración de tácticas de lucha salarial, para ocuparse de la política nacional y con miras a convertirse en gobierno en 1970 (Thielemann, 2019); la práctica de la toma fue vista, además, como una oportunidad para la imaginación de soluciones transformadoras del régimen laboral y de propiedad hasta entonces conocido. De esa forma, la potencia revolucionaria socialista o “no - capitalista” de la toma de fábrica no emerge de la teoría o de un programa militante preexistente (aunque estaba presente en todos los objetos de la cultura obrera “roja”), sino que en la mayoría de los casos previos a 1970 se descubrió durante la acción, como posible salida a la crisis de la permanente tensión circular entre salario e inflación. Aparecieron así la idea de expropiación y control obrero, pero también la construcción de cooperativas y otras formas de autogestión.

En lo que sigue se desarrolla la hipótesis recién mencionada en cuatro capítulos. Primero, se explica la definición del conflicto salarial del movimiento obrero con el gobierno de Eduardo Frei M. (1965 – 1967), y sus consecuencias en el reivindicacionismo obrero; luego, se analiza la creciente práctica de tomas de fábricas iniciada en 1967, y hasta el inicio del gobierno de Allende, poniendo atención a sus elementos más característicos. Posteriormente se presenta el caso de la rebelión militar del 21 de octubre de 1969, y que fue respondida por el movimiento obrero con tomas de fábricas el mismo día. Por último, se estudian los experimentos de autogestión y control obreros que surgieron en los años finales de la década de 1960 y que se adelantaron a las experiencias famosas iniciadas en 1970.

La victoria salarial sobre Frei Montalva, la difusión de la lucha obrera reivindicativa y las razones de la expansión de las Tomas. 1967 – 1968.

Como se ha planteado ya en otro artículo (Thielemann, 2019), la lucha salarial fue uno de los principales conflictos que debió enfrentar el gobierno de Eduardo Frei Montalva, viéndose presionado a la vez por el reivindicacionismo obrero y el permanente ascenso inflacionario. Apenas asumió la presidencia, estableció como límite a las alzas salariales la variación del IPC anual. Pero dicha cifra tope fue desbordada una y otra vez por los trabajadores, en enfrentamientos de carácter nacional muy nutridos en las bases, agitados y

convocados por la Central Única de Trabajadores (la CUT) y que empalmaban con huelgas fábrica a fábrica dirigidas por la militancia obrera. A pesar del límite a las alzas salariales impuesto por los demócratacristianos en el poder, tanto en las empresas privadas como en algunas estatales, y desde comienzos de 1965, estas se demostraban como la única forma de conseguir la paz laboral. Los acuerdos firmados, sobre todo en el sector industrial, subían los salarios en proporciones que iban desde el 50% al 200%. A la vez, el Gobierno intentó por todos los medios legislar para disolver el poder de las organizaciones del movimiento obrero, criminalizar sus prácticas de lucha o bien aplicar estados de excepción y reprimir huelgas. En marzo de 1966, esta política se sintetizó en la táctica de “mano dura”, como la llamó el gobierno. El día 11 de ese mes, el ejército, bajo Estado de Emergencia y por orden presidencial, atacó el sindicato de los mineros de el cobre en huelga, en El Salvador, asesinando a ocho personas: seis mineros y dos mujeres. Además, sobre 120 trabajadores fueron despedidos, quince de ellos fueron perseguidos legalmente, casi todos eran militantes (Vergara, 2008, pp.146-47).

Tal dinámica del conflicto salarial se mantuvo hasta 1967. Ese año, el gobierno intentó dar un salto cualitativo tras dos años de derrotas en su intento de ajuste salarial, y que se volvieron importantes en el paulatino crecimiento de la práctica de la toma de establecimientos. Primero, el gobierno, a diferencia de 1966 y 1967, no puso límites a las alzas salariales, entregando a la voluntad de los empresarios del sector privado la decisión. Esto de inmediato volvió crucial la huelga situada en la fábrica misma y contra el patrón, quien tenía ahora la decisión final sobre los salarios. Luego, con el apabullante ascenso en la cantidad de huelgas durante el año (de 828 en 1966 a 2464 en 1967) (Díaz Bahamonde, Lüders, y Wagner, 2016), el Gobierno intentó impedir legalmente la presentación de pliegos de peticiones por un año, a la vez que buscó instaurar un sistema de ahorro forzoso vía impuesto sobre los salarios. Fueron llamados “Chiribonos” (contracción de bonos y “chirimoyos”, palabra usada en Chile para los cheques sin fondos), y no tuvieron mucho éxito: los obreros le opusieron una huelga general el 23 de noviembre (reprimida con dos muertos). Semanas más tarde, los partidos bloquearon en el Congreso su conversión en ley. En el proceso, el sindicalismo DC vivió una fuerte crisis, perdiendo elecciones en sindicatos de importancia (como en el cobre y el acero) y sufriendo fracturas en sus bases. A fines de ese año, la iniciativa de ajuste salarial del gobierno DC de Frei Montalva estaba derrotada.

La CUT, y en general las franjas organizadas del movimiento obrero que se reconocían en la izquierda partidaria, tenían claro ya en 1967 que sus posibilidades iban mucho más allá de las alzas salariales. “No estamos presionando sólo en el plano salarial, sino que estamos exigiendo un cambio general de política”, dijo la CUT en noviembre de 1967 (Repercusiones del acuerdo de Paro Nacional. La CUT se convierte en poderoso ariete contra la política equivocada 1967). La Central se sintió vencedora y detuvo la presión como bloque sindical al Gobierno, y no realizó más huelgas generales relativas a temas salariales. Sus preocupaciones, desde 1968 y hacia 1970 estuvieron en la defensa de la institucionalidad ante un posible golpe de estado y las luchas políticas internacionales, como la guerra de Vietnam. Así, mientras las cúpulas sindicales comenzaron a prepararse para gobernar, en las franjas intermedias y en las bases del movimiento obrero, la lucha reivindicativa no se detuvo, sino que por el contrario, se expandió y politizó cada vez más. Entre 1967 y 1970, las huelgas aumentaron sin detenerse, pero, lo más interesante, apareció cada vez más la toma de instalaciones de fábrica: En 1968 Carabineros registró 5 tomas de fábrica, en 1969 fueron 24 y en 1970 la cifra saltó a 133 (Boron, 1975, 99).

Este escenario se volvía aún más conflictivo si le sumamos los efectos que produjeron las medidas de “racionalización productiva”, más reconocibles como medidas tayloristas. Estas se venían implementando en algunas fábricas desde fines de la década de 1950 y con énfasis durante la de 1960, y cuya centralidad eran los bonos y castigos individuales por productividad. Durante esa última década, estas medidas amenazaron con debilitar el poder de los sindicatos, dificultados de negociar salarios en colectivo; y en específico el de la denominada “aristocracia obrera”, que veía como su poder de negociación basado en la tradición y la posición estratégica, era desplazado por métricas extrañas y abstractas. En las industrias textiles, del cobre, electromecánicas, entre otras, hubo huelgas de resistencia a estas medidas de inmediato y durante toda la primera mitad de la década de 1960, las que dejaron muy dañadas las relaciones entre obreros y patrones hacia el período final de la década (Thielemann, 2018, 124-25). De esta forma, las medidas tayloristas aplicadas en algunas industrias, la descentralización del reivindicacionismo obrero y un gobierno que renunció a limitar las alzas salariales desde su poder, fueron todos determinantes en territorializar el conflicto entre obreros y patrones. Los galpones y talleres industriales, las calderas y las bodegas, los accesos y los casinos, se convirtieron todos en posiciones estratégicas a conquistar soberanamente en el enfrentamiento al patrón.

Esta territorialización de las conflictivas relaciones laborales, que se hizo notoria en las tomas después de 1967, dispuso el enfrentamiento de tal manera que los barrios aledaños a los establecimientos productivos ensanchaban el lugar mismo del conflicto. De esta forma, la toma aparecía como acción táctica en un conflicto que encontraba en el control del territorio en que estaba el establecimiento una ventaja estratégica frente al ingreso de rompehuelgas o el retiro por parte del patrón de máquinas y otros capitales desde una empresa en huelga. En sí misma, además, permitía convertirse en un centro barrial o comunal de agitación obrera. Nos referimos a obreros que se movilizan convocados por los grupos organizados, también a esos grupos, integrados por militantes (mayoritariamente de izquierda, pero a veces también demócratacristianos) y dirigentes sindicales. La radicalización cruzó todo ese espectro, que en general no mantenía fuertes diferencias entre sí (o no fundamentales sino hasta el trienio de la Unidad Popular). Las bases en general trabajaban y vivían en los mismos galpones y barrios que la militancia y los dirigentes. A su vez, todos ellos compartían con el lumpen, los cesantes y el resto del universo proletario. El movimiento obrero de la década de 1960 se mostraba como una subjetividad histórica mucho más amplia y masiva que lo que se comprende por la categoría económica de clase obrera. Es esa amplitud la que la toma, a diferencia de la huelga, lograba convocar al conflicto obrero, y al hacerlo, lo tensionaba más allá de sus intereses declarados originalmente.

Para esos años, dicha función expansiva de la masividad proletaria del movimiento obrero en el conflicto fue teorizada por Juan Carlos “Lito” Marín, sociólogo argentino que trabajó investigando la Reforma Agraria en Chile, desde fines de la década de 1960 y hasta 1973. Para Marín “La ‘toma’ [...] está al alcance de la clase asalariada en su conjunto, no es un atributo posible, restringido, de una particular porción, sino que se transforma en una alternativa para aquellos que no mantienen un grado permanente de vinculación con un proceso productivo específico. En esa medida la toma adquiere un sentido de clase que difiere cualitativamente -y no sólo cuantitativamente- de la huelga; implica un cambio en la acción en el grado de unidad de la clase de los asalariados. En esa misma medida veremos que sus objetivos -los que las tomas intentan implementar- sufren un cambio significativo en relación a los que hasta ese momento han mantenido las huelgas” (Marín, 1973, 9-11).

La difusión de la práctica de la toma, por último, se vio favorecida por el devenir general de las luchas sociales subalternas del período. Los secundarios tomaban sus liceos en apoyo a las huelgas de profesores, sobre todo en 1968, y en las universidades, desde 1967, la toma de campus era la forma más probada de desatar los procesos de reforma y asegurar incidencia en ellos. De la misma forma, desde 1962, por lo menos, la agitación de la Reforma Agraria, por todas las fuerzas políticas incluyendo al mismo Gobierno y a la Iglesia Católica, insistía en el argumento de que la tierra debía ser “para quién la trabaja”. Con ese discurso copando la prensa y la discusión pública, así como también las conversaciones y experiencias de los militantes obreros, era difícil que estos no se preguntasen si la fábrica también debía ser para ellos, los que allí trabajaban.

Las tomas de fábricas, 1967 – 1970

Las tomas de fábricas comenzaron a practicarse en Chile mucho antes de la década de 1960. De los pocos registros de ocupaciones de fábricas que hay entre los años treinta y sesenta del siglo XX destaca el caso de la toma de la fábrica textil Sumar. En defensa de su sindicato autónomo y luego de una huelga iniciada en junio de 1953, la situación en la fábrica se polarizó. En la madrugada del 17 de junio, el turno de noche se tomó un taller de la textil y el dueño llamó a la policía a intentar desalojarlos. Éstos no solo no pudieron llevar a cabo esta tarea, sino que provocaron a los obreros que estaban afuera del establecimiento, los que decidieron enfrentarse a los hombres armados de revólveres, y a punta de golpes y pedradas los expulsaron de la fábrica, para de inmediato ocuparla en su totalidad. Esta fue, según Gabriel Salazar, la primera toma de la historia de Chile (Salazar Vergara, 2006, 203-4). Los obreros fueron desalojados por cientos de policías y carabineros, atacados con gases lacrimógenos y duramente apaleados. En pocas horas, la toma de Sumar fue disuelta, y algunos días después, la huelga fue derrotada. Al poco tiempo unos 500 obreros fueron despedidos de la fábrica y sus nombres fueron puestos en listas negras (Pozo Mayorga, 2013, 98-100). Estaba claro que una toma era un paso inaceptable, pues cruzaba la frontera fundamental de la propiedad.

Estas experiencias, a pesar de ser extrañas, se difundían como aprendizajes necesarios para las bases obreras. Y no todas eran derrotas. En el siempre combativo sector del cuero y el calzado, la revista sindical del ramo comentaba en junio de ese año 1953 cómo habían vencido en una huelga reciente gracias al uso de la toma, a la que habían accedido “[...] después de serios análisis y discusiones”. La definieron como un “método táctico” que consistía en “la huelga de brazos caídos con ocupación de fábrica”. Según el sindicato, la toma les permitió “encontrar un camino de solución en un lapso de 7 días”. La conclusión política era bastante clara: “Con seguridad para el estado de los capitalistas fue doloroso sentar el precedente de atropello a la propiedad privada, porque para ellos solo vale el derecho de propiedad de los explotadores. Tratándose de los trabajadores, no les importa hacer respetar ni el derecho a vivir como seres humanos.” (Unidad Proletaria, junio de 1953, p.1).

Tras el fin de la Ley Maldita y con la nueva realidad subjetiva generada por las luchas sociales y electorales del bienio 1957 - 1958, la osadía de los obreros en el enfrentamiento a los patrones también aumentó. Las experiencias de tomas se cuentan graneadas en el comienzo de la década de 1960. Por ejemplo, el 28 de diciembre de 1960, los obreros de la fábrica textil Vestex ocuparon las instalaciones de su fábrica de forma pacífica, para ser desalojados en la madrugada del 4 de enero. Ese día, unos tres mil carabineros, según la

prensa, vinieron a sacar de la fábrica a los 520 obreros, entre ellos varias mujeres con sus hijos (Las Noticias de Última Hora, 4 de enero de 1961, p. 16). Este último elemento, la suma familiar a la toma, sería una característica en los años siguientes.

Se registran ocupaciones de centros de trabajo en varios momentos de la década. En 1960 una toma de las oficinas centrales del Banco del Estado por los trabajadores, en 1962 una toma de los accesos a Yarur en el marco de una huelga ilegal terminó con los obreros reprimidos a tiros y gases por Carabineros. El día 5 de noviembre, unos 750 obreros que trabajaban en la construcción de la Población Manuel de Salas, en el sur de Santiago, se tomaron la faena y con ella, las 263 viviendas a medio construir. Al otro día, con la intervención del diputado PS Clodomiro Almeyda y de la Federación Industrial de Obreros de la Construcción (FINC), los obreros ganaron su petitorio respecto a temas salariales y devolvieron las viviendas, volviendo también al trabajo (Las Noticias de Última Hora, 6 de noviembre, 1962, p. 16). La toma de la Población Manuel de Salas es de las primeras en que la ocupación presiona una negociación que, así, resulta exitosa para los obreros.

En el año 1965, en medios de las huelgas contra el ajuste salarial de Frei Montalva, comenzaron levemente a generalizarse las tomas de centros productivos urbanos como herramientas de negociación. De las mismas se obtenían inmediatos aprendizajes políticos, como se denota en el relato sobre la toma de uno de los talleres -el de Diesel- de la Maestranza de San Bernardo, por parte de los obreros, en el primer semestre de 1965: “Ante esta situación y ante la negativa de que se considerara la petición hecha por el Taller Diesel, el personal optó por declararse en huelga de brazos caídos, lo que posteriormente se transformó en huelga con la toma del taller, para evitar de este modo que se sacaran los repuestos que allí existen”. Los obreros mantuvieron la toma y la huelga por más de 26 días, saliendo vencedores. La conclusión sacada por los dirigentes y grupos organizados de los obreros ferroviarios también merece ser citada: “Quienes ya tenemos más de 20 años de trabajo y de intensa actividad sindical y que por ende hemos participado disciplinadamente en un sinnúmero de paros y huelgas sean estos de carácter local o nacional, nunca se había presentado el caso de que una huelga se llevase a efecto con la toma del taller, lo que para muchos de nosotros, por lo menos dentro del gremio ferroviario, se constituyó en una nueva herramienta de lucha que dejó admirado a más de algún compañero” (El Riel, abril de 1965, p. 1). No fue la única toma de ese primer año del gobierno de Frei Montalva. En junio, *Central Única* informó que los 73 obreros de la fábrica de estructuras metálicas Me Tigrít, de la ciudad puerto de Talcahuano se tomaron la fábrica. En su petitorio estaba la expulsión del país del “yanqui John Me Tigrít por reiteradas y abiertas violaciones de las leyes chilenas”, entre los que estaba un atraso de pagos de hora de colación de más de quince años, así como el trato de simple trabajador a obreros y empleados profesionales. (Central Única, junio de 1965, p. 2) En noviembre del mismo año, y en un intento por solucionar un conflicto que había durado 69 días de huelga, la mayoría de los obreros se tomaron los edificios de la empresa INDURA (Las Noticias de Última Hora, 2 de noviembre, 1965, p.14). Aunque pocas, estas experiencias se difundían ampliamente en los centros de trabajo a través de todo tipo de publicaciones sindicales y militantes, así como podían leerse en la prensa escrita que les daba relativa cobertura.

Con la represión estatal sobre los mineros de la ciudad de El Salvador en marzo de 1966, las franjas organizadas del movimiento obrero tomaron nota y durante el resto de ese año se impone cierta calma forzada por estados de excepción y el argumento de las balas. Pero ya en 1967 se producen suficientes ocupaciones de establecimientos como para calificar que desde aquel año se convierte en una práctica de masas. Destacan

así la ocupación, ocurrida el 12 de abril de dicho año, de la Maestranza Cerrillos de Talcahuano, y decidida por los obreros luego que su huelga en marcha fuese desoída por los patrones. También la ocupación de la Fundación Pacífico, en Santiago, por parte de obreros agotados tras infructuosos 80 días de huelga. Una actitud similar adoptaron los obreros metalúrgicos de la AMNCO, de Talcahuano, quienes ocuparon los talleres de la empresa en mayo (Las Noticias de Última Hora, 8 de mayo de 1967, p.16). Casi todas las ocupaciones de aquel año buscaban presionar durante una huelga por salarios o bien, hacer cumplir acuerdos pasados que habían sido desconocidos por la empresa. La toma, como se indicó, nace así como método de presión laboral, en el lugar de trabajo y masificando allí al movimiento.

Como se indicó, es en 1968 cuando las tomas comienzan a registrarse en informes de Carabineros, en tanto se convierten en un “problema” creciente. Ese año, la policía registró cinco ocupaciones, aunque, a la luz de los registros presentados más arriba, pueden haber sido más. Ya el 3 de enero los obreros tabacaleros se tomaron el casino de la fábrica de Valparaíso, durante una huelga salarial (El Siglo, 3 de enero de 1968, pp.1,6). Estas ocupaciones de sectores de la empresa, eran una forma común de la toma como herramienta de presión en la negociación de un conflicto. La instalación de ollas comunes, que convocaron comúnmente a las esposas de los obreros, también le otorgaron un protagonismo a las obreras, que solían ser mayoría en rubros como el textil. Además, muchas veces terminaban por involucrar a toda la familia obrera en el territorio del conflicto. En tanto estas acciones -también los piquetes cortando los accesos a las fábricas- proyectaban la amenaza territorial, una especie de cerco, sobre la propiedad, fueron severamente perseguidas como si fuesen una toma. En Santiago, en Alameda con avenida España, el 9 de febrero de 1968, las obreras y familiares de la fábrica Singer instalaron su olla común, fueron multadas de inmediato y pudieron almorzar un guiso de choclo con arroz y ensalada de cebollas con tomate y lechuga. Todo eso mientras otros obreros y obreras impedían que algunos patrones sacaran “maletines y documentos de cobranza para trabajar en otros lugares”, acción que contravenía una orden de la Dirección del Trabajo (El Siglo, 9 de febrero de 1968, p.8; 10 de febrero de 1968, p.6). La dualidad piquete y olla común también es visible en la huelga de la Monarch en abril de 1969 (El Siglo, 1 de abril, 1969, p.9).

Pero es la toma y su defensa ante la policía, rompehuelgas o matones de la empresa, la que permite la convocatoria a toda la subjetividad dispuesta de forma clasista, más allá de los sujetos estrictamente contratados y en huelga. En julio de 1968 fue tomada la fábrica de equipos electrónicos SABA por sus obreros en demanda de mejoras salariales. El 30 de ese mes, durante el desalojo policial y, según denunció la defensa de las decenas de obreros que fueron apresados por meses, las bombas lacrimógenas produjeron un incendio que redujeron a cenizas la fábrica (El Siglo, 31 de julio de 1968, p.6). Según testimonios, SABA fue el primer intento de toma para forzar la autogestión a partir de la inserción militante de un grupo de comunistas llamado Ranquil, pero el violento fin de la toma lo impidió (Giusti Cordero, 2013). Pero SABA era parte de un proceso mayor de “ensayo y error” en la elaboración de caminos para el “control obrero”. Varios militantes que estuvieron en la toma de la fábrica de postes de luz e implementos eléctricos “Andrés Hidalgo Ltda.” en diciembre de 1968, recuerdan el aprendizaje que había significado la derrota de la toma de SABA. Estaban allí los mismos (Mariano Palma, Marta Harnecker, entre otros) del grupo Ranquil (entonces fuera del PC) y aquella vez, cuando la policía intentó desalojarlos de los galpones de la “Andrés Hidalgo Ltda.”, un mar de niños, jóvenes, estudiantes, mujeres dueñas de casa, militantes, otros obreros y amigos del barrio, se parapetaron entre panderetas, pilas de postes y carretes de cable, haciendo imposible cualquier desalojo por la fuerza (Aguilera Caballero, 2010,

p.62). Como se verá, esa proletarianización de la fábrica tomada no fue coyuntural, sino que se acrecentó cuando las tomas devinieron en control obrero, sirviendo de espacios de socialización alternativa.

En el trienio de 1968 a 1970 las tomas, aunque eran una práctica en el marco de una huelga, expresaron la creciente territorialización del conflicto laboral, o, lo que es lo mismo, la tendencia a la situación de la lucha de clases a ras del suelo de la fábrica. La toma permitía realizar el interés inmediato específico a cada empresa, estableciendo una relación directa entre formas radicales de lucha y sus consecuencias prácticas. Así, el punto específico del pago de la semana corrida fue forzado con la toma de la Fábrica Nacional de Paños Oveja, de Tomé, en agosto de 1968 (El Siglo, 29 de agosto de 1968, p.9). En la oficina salitrera de María Elena en septiembre de 1968, la toma de la planta de fosfato buscó impedir el acceso de los rompehuelgas (El Siglo, 28 de septiembre de 1968, p.5). También se tomaron la fábrica los setecientos obreros y ciento cincuenta empleados de Ferriloz, en Santiago, para detener las faenas y así ganar las postergadas vacaciones (El Siglo, 22 de enero de 1969, p. 16). Por su parte, los obreros de Codigás se tomaron la planta de la empresa en abril de 1969, como medida de presión para ganar la disputa salarial, pero también para impedir las represalias laborales y legales de la empresa contra los dirigentes y militantes involucrados en el conflicto (El Siglo, 4 de abril de 1969, 9). En 1969, y en una práctica que se volvería normal luego de las elecciones presidenciales de septiembre de 1970, la toma se hizo también para defender la producción (y el empleo) ante abandono del patrón o detención forzada de las faenas. Así ocurrió el 20 de abril de 1969, cuando los obreros de la Papelera del Pacífico, en San Francisco de Mostazal, se tomaron la empresa en protesta por el desabastecimiento de materias primas que la Papelera de Puente Alto les estaba negando, y como defensa ante un posible cierre de la fábrica (El Siglo, 20 de abril de 1969, p.3).

Durante el año 1970 el conteo de tomas alcanzó las 133. En su mayoría, estas tomas ocurrieron desde que se supo del triunfo electoral de Allende en las elecciones presidenciales del 4 de septiembre. De estas, varias se produjeron entre esa fecha y el 3 de noviembre, cuando Allende por fin asumió la presidencia. El miedo que produjo en los propietarios el triunfo electoral de la alianza de partidos marxistas, generó fuga de capitales, cierres y abandonos de fábricas, o la disposición de estas para el boicot económico contra el gobierno de Allende (Bitar, 1996, 75-79). Así, y con la memoria fresca de la breve pero influyente experiencia de las ocupaciones de fábrica contra el golpe de Estado en octubre de 1969 (en detalle más adelante), las tomas obreras de septiembre a noviembre de 1970 mezclaban conflictos locales, la necesidad de defender su propio trabajo y una defensa del gobierno democrático. Esta radicalización veloz fue más común en los establecimientos más pequeños y con menor tradición sindical. Según Barbara Stallings, la radicalización que comenzó a crecer con miras al control obrero de las fábricas ocurrió principalmente en aquellos polvorientos galpones, a los que llegaban el clasismo agitado por la militancia obrera, y también la crisis del desarrollismo, pero que por otra parte, estaban demasiado lejos de la protocolar dirección inmediata de la CUT y sus cuadros (1979, 118).

Vista desde abajo, la famosa llave expropiatoria del gobierno de la Unidad Popular (la paralización para forzar la intervención estatal legal sin pasar por el parlamento) es vista como una recuperación de su fuente laboral por los trabajadores, y la prueba en sí de lo innecesario que era el propietario para el desarrollo de la empresa. A fines de 1970, con un creciente número de fábricas tomadas y viendo que las clases propietarias mostraban signos visibles de abandonar sus empresas, a los obreros, muy confusos ideológicamente pero con una probada disposición clasista, no les quedó otra que hacerse cargo de su fuente de ingresos y, asimismo, de la producción. El objetivo político de clase era así “descubierto” en la radicalización de conflictos de objetivos sociales.

De ahí que la toma sea un acto de radicalización y a la vez radicalizador, de formas y naturaleza pagana. Entre las bases obreras del trienio 1968-70 estuvo más presente la cuestión del poder ante el patrón que algún ideal de sociedad futura. Más el decante de un clasismo tosco e intuitivo, que una conclusión ideológica de rasgos finos. Esto es observable en que pocos años antes de la experiencia de la Unidad Popular, la participación en la gestión de las fábricas no era una demanda central para el movimiento obrero. En un estudio hecho en 1966 sobre 517 pliegos de peticiones sindicales en Chile, solo en 159 se exigió algún tipo de participación obrera en la dirección de la empresa, las cuales en su mayoría apuntaban a participar en la definición de salarios y bonos (Espinosa y Zimbalist, 1978, p.38). A pesar de ello, en algunas empresas con capitales estatales, hubo importantes demandas por participación en la empresa. Entre ellas, destacan aquellas de elevado nivel técnico y cuyos trabajadores altamente especializados tenían capacidad de negociación por sobre el resto. En ese grupo destacan los azucareros de IANSA, los petroleros de ENAP, los trabajadores de la electricidad en ENDESA y los trabajadores de la Línea Aérea Nacional, LAN Chile (Espinosa y Zimbalist, 1978, p.40). De todas formas, las demandas y razones de la mayoría de las tomas de fábricas ocurridas desde 1968 en adelante muestra un tanteo que apuntó cada vez más hacia el control de los establecimientos. Más que el “cogobierno” del establecimiento con el odiado patrón, los obreros buscaron desplazar a éste del control, para así sacarlo del universo productivo de la empresa, y así también de sus vidas. El descubrimiento político de tantear el más allá de los límites de la huelga salarial no era la posibilidad de incidir en la gestión de la empresa, sino la de apropiársela para gestionar otro orden laboral sin patrón y basado en el poder obrero directo. Cuando llegó noviembre de 1970, la agitación revolucionaria de la Unidad Popular y el boicot empresarial prácticamente empujaron a los obreros a la ocupación masiva de las fábricas, y muchos de ellos ya sabían cómo y por qué hacerlo.

El “primer paro de octubre”: las ocupaciones de fábrica del 21 de octubre de 1969.

Como se ha visto, las tomas fueron creciendo en cantidad y complejidad hacia 1970. Pero durante todo ese tiempo, la ocupación obrera de industrias, talleres y galpones no había tenido ningún tipo de reconocimiento institucional. Por el contrario, la violenta respuesta represiva era lo más común. Esta situación cambió el 21 de octubre de 1969, con la sublevación militar liderada por el general Roberto Viaux, acuartelado en el regimiento Tacna.

En el marco de una fuerte tensión social y política en Chile, la sublevación de Viaux y sus soldados fue vista por los sectores organizados del movimiento obrero como una crisis que daba la posibilidad de conquistar mejores posiciones. A pesar de ello, los partidos rojos, el PS y el PC de la UP no lograron consensuar una estrategia conjunta. El PC defendía la movilización popular callejera y la ocupación de las instalaciones productivas estratégicas de la economía, como el agua, la minería o el transporte. Por su parte, el PS exigía nacionalizar el cobre y la banca, subir las remuneraciones del ejército y que fuese el pueblo quien llenase el vacío político mediante su propia imposición (Las Noticias de Última Hora, 28 de octubre de 1969, p.5). La CUT se debatió entre ambas posturas, pero finalmente su llamado se alineó con el PC. El comunicado de la Central señaló que el llamado a la toma buscaba evitar “el error en que incurrieron los trabajadores de Brasil, que congregándose solo en mitines y demostraciones callejeras, dejaron que los militares apresaran a sus dirigentes y tomaran los servicios fundamentales y los establecimientos principales” (Las Noticias de Última Hora, 21 de octubre de 1969, p.2). Antes del intento de golpe, la CUT venía trabajando una serie de exigencias económicas para el gobierno, y ese día relanzó sus demandas, las que en general eran relativas a mejoras económicas.

¿Cuál fue la respuesta del movimiento obrero? Siguiendo la prensa relativa a los hechos, se evidencia una escasa atención a la acción de las bases del movimiento obrero, pero así y todo es visible una fuerte movilización antigolpista de la mayoría de las organizaciones. El paro convocado el día 21 recién fue bajado por la CUT el día 23, aunque muchos volvieron a las faenas el día anterior. Se dio cuenta de un copamiento de las calles en los barrios obreros por parte de muchedumbres movilizadas. Más allá de estas informaciones, la lista de fábricas tomadas esos días de octubre es poco clara. La mayoría de las noticias señalan que las faenas se paralizaron, sin especificar si éstas fueron tomadas o no, y también el llamado de la CUT no implicaba todas las empresas, sino solo aquellas de sectores relevantes. Entre las que sabemos que se produjo toma, destacan la Industria de calzado Yarza de Talca, la planta azucarera de IANSA en Linares, algunas plantas de ENDESA, la Maestranza de San Bernardo y algunos accesos portuarios de San Antonio. Además, estudiantes se tomaron la Universidad Católica de Valparaíso y la sede Antofagasta de la Universidad de Chile (Las Noticias de Última Hora, 22 de octubre de 1969, p.4; El Mercurio, 23 de octubre de 1969, pp.21-26).

A pesar de los llamados de la CUT a volver a la normalidad desde el día 22, recién el 24 de octubre se bajaron las últimas tomas. Probablemente esos días extra se usaron localmente para ajustar cuentas en conflictos laborales ya en marcha antes del 21. Toda la clase política, incluido el mismo Frei Montalva que los reprimía violentamente meses antes, valoraron públicamente la acción de los obreros en defensa de la democracia y las instituciones. La CUT celebró las tomas, y cuando poco más de un mes más tarde firmó el primer acuerdo salarial de la historia con el Gobierno, indicó que las ocupaciones de fábrica contra la sublevación de Viaux eran la base del trato (El Siglo, 4 de diciembre de 1969, pp. 1, 5). Aunque el acuerdo fue duramente criticado por sectores de izquierda (ilustrativa resulta la columna de Eugenio Lira Massi, Clarín, 10 de diciembre de 1969, p.3), la legitimidad que alcanzó la toma de fábricas fue enorme. La conclusión obvia era que el control obrero se justificaba en la medida que la democracia o las conquistas de los obreros estuviesen en riesgo. A su vez, dicho consenso político planteaba problemas políticos críticos en nombre de la emergencia, pues según el mismo, el derecho de propiedad podía ser conculcado si así la república lo necesitaba, y quién se adjudicaba dicho mandato era el movimiento obrero.

Los hechos ocurridos entre el 21 y el 24 de octubre de 1969, en varias fábricas chilenas, por algún tiempo cubrieron de tono republicano la ocupación de fábricas. La combinación de lucha callejera y ocupación de recintos marcaba ese ensanche proletario que permitía el control territorial por el movimiento obrero. Además, y muy importante, la toma contra el golpe era una especie de declaración de ciudadanía obrera. El discurso de ocupar las fábricas como método de defensa de la democracia y la comunidad nacional, celebrada por vocerías de izquierda y de la DC en el gobierno, se volvería de tonos revolucionarios tras la estampida de capitales luego de septiembre de 1970.

Experimentos: COOTRALACO y otros casos de autogestión y control obrero. 1968 - 1970

Aunque después de 1970 fue el tema central de intelectuales y militantes, con anterioridad a esa fecha el control obrero de la producción no era algo importante, ni siquiera entre sindicalistas. Entre la militancia, se circunscribía a una forma o acción que era parte central o precondition del momento revolucionario. En general, en los programas de la izquierda se consideraba la estatización, pero no la gestión misma, o bien

no se desarrollaba o se disolvía en la consigna “poder popular” (Cancino Troncoso, 1988, pp.118-32; Zapata, 1974). Por su parte, la participación de los trabajadores en el control de las industrias no fue apoyado más que ideológicamente por el gobierno DC, a partir de sus pervivencias discursivas relativas al comunitarismo.

Así y todo, además de las experiencias de tomas de fábrica, que como dijimos se centraban mayoritariamente en mejorar la posición de negociación salarial o similar, se produjeron experimentos de control obrero y autogestión en el trienio que se estudia en este artículo. Entre los casos que se han registrado, las formas de acceso a la propiedad fueron diversas y la toma de fábrica fue solo una de ellas. Más bien, el hilo conductor común a estas empresas reside en la crisis del modelo desarrollista de pequeña y mediana empresa industrial, agudizado por la crisis económica que comenzó a arrear en la segunda mitad de la década de 1960.

Hubo casos en que los obreros intentaron llegar al control obrero a través del permiso estatal. Fue el caso de SEDAMAR, una firma textil de Valparaíso que sumaba cuarenta años de antigüedad a fines de la década de 1960. En 1969, los dueños la cerraron y despidieron a 87 trabajadores. Estos le solicitaron al gobierno de Frei Montalva que les permitiera llevar la fábrica ellos mismos, bajo gestión obrera. La autoridad no escuchó a los trabajadores, y en su lugar le facilitó un préstamo de 400 mil escudos a sus dueños. Años más tarde, los obreros tendrían más suerte y durante el gobierno de Allende, SEDAMAR pasó al área de propiedad social –es decir, fue estatizada- y su producción aumentó casi cinco veces, convirtiéndose en la empresa textil estatal más exitosa del trienio de la UP (Espinosa y Zimbalist, 1978, p.41).

Otro caso similar es el de “Industria Química del Sur” de Talcahuano. Dicha empresa, a comienzos de 1970, fue comprada a sus dueños por parte de los obreros. La operación comercial fue apoyada desde el Gobierno, recibiendo de este un jugoso préstamo en dinero, junto a la capacitación en administración a los trabajadores. Si bien la empresa química resultó un caso exitoso de autogestión obrera, políticamente no fue tan valorada por las bases. Marcelino, un obrero de dicha industria entrevistado por el historiador José del Pozo, cuenta que: “nosotros mismos eramos los dueños, pasamos a ser patrones, cambió la mentalidad, ya no les interesaba la solidaridad, ya no les gustaba desfilar, esa era la parte negativa. Y ese tipo de proyectos los impulsaba la DC, para transformar la clase obrera en patrones” (del Pozo, 1992, p.136).

El control obrero también se experimentó en SOTRAMET (“Sociedad de Trabajadores Metalúrgicos”, antes “Ardygas”), aunque su caso fue distinto a los ya vistos. En octubre de 1970, René Doggenweiler Setz, el dueño de Ardygas, se convirtió en trabajador y colega de los 34 trabajadores de la firma. Doggenweiler pertenecía a la Asociación de Empresarios Cristianos, y en coherencia radical con las ideas de ese grupo decidió disolver su propiedad en el resto de los trabajadores, para así formar una sociedad cooperativa. El proceso comenzó en 1966, con la formación de los obreros en cursos de administración, y terminó en abril de 1970, cuando firmaron el contrato. El proceso concluyó finalmente en octubre de 1970, aunque en 1971 todavía estaba su antiguo nombre en el frontis de la planta (Morris 1973, 161-62). SOTRAMET no fue un caso exitoso como el anterior, y en 1969 el gobierno estimó necesaria una intervención económica para evitar su quiebra inminente (Espinosa y Zimbalist, 1978, p.41). Con el cambio de relación laboral directa, los trabajadores de SOTRAMET al parecer fueron cambiando también su actitud como trabajadores. El descubrimiento de la política no era únicamente por la vía del conflicto, sino también por la vía de la responsabilización administrativa de la planta. De esta forma, los temas políticos se volvían urgentes para los obreros, porque parecían determinar los destinos de la

planta que, en ese momento, estaba en su poder y cuyos destinos entonces podían decidir. En el verano de 1971, siete de los treinta y cuatro trabajadores no salieron de vacaciones y gastaron sus días libres recorriendo otras fábricas y explicando los beneficios de no tener patrón y de emprender una cooperativa (Morris, 1973, p.166).

Tal vez el caso más interesante de los que hemos podido registrar es la ya mencionada toma de la fábrica “Andrés Hidalgo Ltda.”. Los combates de los obreros de dicha empresa no eran distintos de las amargas huelgas de las industrias pequeñas. Como decía un obrero citado por David J. Morris: “íbamos a la huelga por frustración y desesperación. Tal vez ganemos un pequeño aumento. Debido a la inflación, volvimos a la línea de huelga, tratando de recuperar lo que habíamos perdido durante ese año” (Morris, 1973, p.158). Como se dijo, los aprendizajes de la derrota de la fábrica SABA estaban en el origen de la militancia que emprendió de nuevo el intento de toma y control obrero en la industria de postes de luz. En diciembre de 1968 los trabajadores de la Industria Andrés Hidalgo, recordando SABA, pasaron mucho tiempo organizado su comunidad a través de charlas y cursos, así como yendo a otras fábricas para hablarle a los trabajadores de nuevas formas de lucha y gestión. Como ya se relató, cuando el empleador intentó desmantelar la maquinaria en orden de transferir su planta a otro lugar, la comunidad de mujeres que vigilaban las instalaciones de la fábrica, alarmaron de la situación y en minutos cientos de vecinos, familiares, amigos, militantes, estudiantes y parlamentarios de izquierda, detuvieron el intento. La policía, a diferencia del caso SABA, se retiró sin desalojar. Como dijo la revista Punto Final en un reportaje especial dedicado a COOTRALACO: “A partir de ese momento el proceso se aceleró. Tomaron los trabajadores la producción a su cargo”. Los obreros ordenaron las cuentas, repactaron deudas, formaron frente con otros obreros para suplirse de materias primas, evitando así el boicot de otros propietarios industriales (Punto Final, 28 de octubre de 1969, p.30).

El 28 de enero de 1969, COOTRALACO comenzó a funcionar. No fue fácil, sufrió el acoso de la CORFO, y perdió a un tercio de sus trabajadores en los primeros meses. Durante los años 1969 y 1970, la empresa bajo control obrero pasó momentos duros. El Estado era el principal comprador de los productos de “Andrés Hidalgo Ltda.” y la DC en el poder fue acusada por los trabajadores de COOTRALACO de boicotear su empresa al negarles el crédito y cortar los pedidos. Esto resultó en la situación crítica de muchos de sus trabajadores, quienes, a pesar del apoyo de colectas entre estudiantes y otras franjas de trabajadores, no lograban elevar su salario sobre los dos dólares a la semana. Esto generaba problemas familiares a los obreros más comprometidos con lo que consideraban la construcción revolucionaria de una planta autogestionada. Pero en cuanto el experimento fue madurando, esta crisis se fue sobrellevando. En los años posteriores, la familia y otros miembros del universo proletario protagonizaba parte de las asambleas semanales que tenía el colectivo obrero de la fábrica. Es más, con el tiempo, los galpones de la fábrica y sus patios se convirtieron en una especie de Centro Comunitario, que albergaba una clínica médica y dental gratuita construida por los obreros, junto a militantes, activistas y habitantes del barrio. La proletarización de las fábricas bajo control obrero no era solo un fenómeno de masividad, sino también de apropiación territorial. (Morris, 1973, pp.160-61).

No todo resultó así de reconfortante. En COOTRALACO se produjeron problemas entre las categorías de empleados y las de trabajadores. Si bien los trabajadores de COOTRALACO disolvieron estas diferencias entre trabajo intelectual o manual “por decreto”, estas no desaparecieron de inmediato y la igualación formal trajo problemas reales. Según un trabajador entrevistado por Morris, los obreros “temían que fuesen opacados por los empleados que tenían una cultura más alta”. De la misma forma, los empleados “consideraban

que aquello [la igualación de categorías] los estaba poniendo en una posición inferior”, perdiendo el prestigio y autoridad que el antiguo sistema le garantizaba. Con la fábrica andando, al parecer la división comenzó a desaparecer al fortalecerse la pequeña comunidad de trabajadores. Un antiguo trabajador y luego contador de COOTRALACO, mencionó a Morris que “el trabajador puede continuar subiendo en la escala ocupacional del viejo sistema, pero para hacerlo tendría que pisar las espaldas de sus propios hermanos” (Aguilera Caballero, 2010; Morris, 1973, p.160).

Al igual que con los trabajadores de SABA y SOTRAMET, los trabajadores de COOTRALACO no tuvieron apoyo de la CUT más allá de declaraciones sin efectos prácticos. Según Espinosa y Zimbalist, más de treinta empresas cooperativas, dirigidas por los trabajadores, fueron creadas en los dos últimos años del gobierno de Frei Montalva y la DC. La mayoría tenía menos de 80 trabajadores y todas se constituyeron una vez que los dueños abandonaron la planta o la declararon en quiebra (y en algunos casos la ofrecieron en venta a los trabajadores). Con el ascenso de Allende a la presidencia, la situación de estas particulares empresas cambió, aunque ni la CUT las apoyó ni el gobierno quiso, aunque tampoco hubiese podido, sostenerlas económicamente. Así y todo, las firmas gestionadas por los obreros llegaron a 100 en septiembre de 1972 y para el Golpe ya eran 120. En total empleaban 8 mil trabajadores, los cuales se agrupaban en la Federación de Brigadas y Empresas de Trabajadores (Espinosa y Zimbalist, 1978, p.42; Baltera, 1972, pp.13 - 19).

Las experiencias descritas en los párrafos anteriores muestran que las tomas de fábricas eran una respuesta difusa, a veces casi instintiva, a una crisis de las empresas pequeñas y medianas. Como ya se indicó, los obreros de esas empresas, carentes de la pesada mochila militante de los cuadros más avezados de las fábricas grandes, así como también urgidos por el colapso económico de sus trabajos, se vieron obligados a la creación heroica. Y aunque no fueron ejemplo inmediato para la izquierda, si permitieron incursiones más allá de los límites de las formas dominantes de propiedad y explotación capitalista, saltos que expandían la imaginación revolucionaria justo antes de los años del asalto al cielo.

Conclusiones

El desarrollo y difusión de la práctica de tomas de fábricas, durante la segunda mitad de la década de 1960, deben ser consideradas como una fase en la radicalización general que vivió en esos años el movimiento popular. No se puede comprender, por lo tanto, como un fenómeno espontáneo o que simplemente respondió a la agitación militante luego del triunfo electoral de Salvador Allende en 1970. La huelga salarial fue un momento de relación tensa con los patrones, y que fue abriendo, año a año, pliego a pliego, una comprensión política de lo que ya era un enfrentamiento permanente. Desde la derrota de la política de ajuste salarial del gobierno DC de Frei M., en 1967, los salarios se mantuvieron fuertemente al alza; ante esa realidad las fuerzas dominantes en la directiva de la CUT se prepararon para ser gobierno y abandonaron las movilizaciones generales del trienio anterior. Este llamado a prepararse para protagonizar un gobierno revolucionario, para el grueso del movimiento obrero y sin sentir que contradecían a sus dirigentes o partidos, fue comprendido crecientemente y en amplias franjas como una acoso cotidiano y hostigante hacia la patronal, actitud que se volvió abiertamente expropiatoria cuando el cambio en las relaciones de fuerza, en 1970, lo permitió.

Aunque las conclusiones se han ido adelantando en las páginas anteriores, es importante reafirmar cuatro ideas del texto sobre el proceso estudiado.

En primer término, la toma de fábricas nace como una búsqueda por nuevas formas de presión sobre la patronal, en una generalizada lucha salarial como fueron los años del gobierno de Frei Montalva (1964 - 1970). Así, durante los años que van de 1967 a 1970, los obreros ocuparon cada vez más el recurso del “secuestro” de la fábrica para negociar una huelga bajo chantaje. Este recurso, además, permitía sumar a otros grupos, aliados de los obreros pero que la huelga excluía, como las familias, vecinos, estudiantes, etc. y que hemos denominado como “universo proletario”. Esta masificación proletaria del frente obrero en un conflicto local resultaba un otro factor de ventaja sobre el patrón. El éxito de la medida es difícil de verificar, pero los datos que dan cuenta de su creciente expansión en el trienio final de la década de 1960 muestran que resultó cada vez más atractiva en las bases del movimiento obrero. Entonces, se insiste que el estudio de la práctica de ocupar las fábricas revela su origen más como aprendizaje de la lucha misma que como fetiche ideológico inserto desde fuera.

De la misma forma y desde 1967, la toma cada vez más fue vista como solución extrema a la crisis económica de las empresas. En la medida que las quiebras producían el cierre y la consecuente cesantía de los obreros de un establecimiento, el recurso a la toma y autogestión fue también atractivo. Como se estudió en casos como el de COOTRALACO y en las ocupaciones en respuesta a la fuga de capitales luego del 4 de septiembre de 1970, la toma de las instalaciones era una forma de defender el trabajo propio, a la vez que se descubría las posibilidades revolucionarias, de la sociedad, de la vida propia y de la comunidad obrera, durante el control momentáneo de la fábrica. Las experiencias breves de control obrero sobre fábricas colapsadas o quebradas, ofrecía también un escenario ideal de lo que algunos militantes imaginaban como la revolución socialista.

Por último, la toma de fábricas obtuvo también su legitimidad como práctica defensiva general de las instituciones democráticas en los hechos del 21 de octubre de 1969, con la rebelión militar dirigida por el general Viaux. El reconocimiento de toda la clase política dado a los obreros que se tomaron las fábricas contra lo que se consideró un golpe de Estado, no puede ocultar el hecho que dichas tomas fueron usadas, en varios casos, para ajustar cuentas pendientes con los patrones. Así, los hechos de octubre de 1969 ponían el derecho de propiedad por debajo de la necesidad de defensa de las garantías democráticas. Dicho enlace entre acción y objetivo político se volvería fundamental durante el gobierno de la Unidad Popular y sobre todo, tres años después, durante el paro patronal de octubre de 1972, cuando las organizaciones de base del movimiento obrero desataron la mayor oleada de tomas de fábrica de la historia de Chile.

Cuando la Unidad Popular llegó al gobierno en 1970, sus militantes no necesitaron instigar demasiado la expropiación obrera de las industrias. Al revés, no les quedó otra que intentar conducir un movimiento de tomas y control obrero que empezó a tantear sus propias posibilidades y límites varios años antes, y que en la ventana de oportunidad de fines de 1970 simplemente se desató. Para el crucial mes de septiembre de ese año, importantes sectores del movimiento obrero ya tenían cierta experiencia acumulada en la disputa territorial contra el patrón, así como también un creciente entusiasmo por arrebatarle las máquinas a las clases propietarias. Con el triunfo de Allende, sintieron que podía empezar la revolución que habían descubierto en noches de tomas y días de asamblea en galpones industriales temporalmente liberados. Pero esa ya es otra historia.

Fuentes y Bibliografía

- Prensa diaria con sede en Santiago de Chile: El Mercurio, El Siglo, Las Noticias de Última Hora, Clarín.
- Prensa Obrera: El Riel, Central Única, Unidad Proletaria.
- Revistas: Punto Final

- Aguilera Caballero, Galia. 2010. «Proceso de desalienación en los trabajadores de la fábrica COOTRA-LACO (1968-1973)». Tesis para optar al grado de Licenciada en Historia. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. <http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/72/tlhis05.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (10 de octubre de 2019).
- Angell, Alan, y Marta Moroni. 1969. «La clase obrera y la política en Chile». *Desarrollo Económico* 9(33): 33-65.
- Baltera, Pablo. 1972. “Anexo: Las empresas de trabajadores”. *Nueva Economía* 2: 13 – 19.
- Balvé, Beba, y Beatriz S Balvé. 2005. *El '69: huelga política de masas : rosario, cordobazo, rosario*. Buenos Aires: Ed. RyR.
- Bitar, Sergio. 1996. *Chile, 1970-1973: asumir la historia para construir el futuro*. Pehuén Editores Limitada.
- Boron, Atilio A. 1975. «Notas sobre las raíces histórico-estructurales de la movilización política en Chile». *Foro Internacional* 16(1): 64-121.
- Cancino Troncoso, Hugo. 1988. «Chile: La problemática del poder popular en el proceso de la vía chilena al socialismo 1970-1973». Aarhus University Press.
- Díaz Bahamonde, José, Rolf Lüders, y Gert Wagner. 2016. *Chile 1810-2010 la república en cifras: historical statistics*. Santiago, Chile: Ediciones UC.
- Edwards, Phil, y Inc ebrary. 2010. *More Work! Less Pay!: Rebellion and Repression in Italy, 1972-1977*. Manchester: Manchester University Press.
- Espinosa, Juan G, Andrew S Zimbalist, y coaut. 1978. *Economic democracy: worker's participation industry. 1970-1973*. New York: Academic Press.
- Etchemendy, Sebastián. 2010. «Tras las huellas del clasismo : el sindicalismo de base revolucionario en Argentina». En *Lucha armada en la Argentina (anuario 2010)*, Buenos Aires: Ejercitar la Memoria, 4-17.

- Faletto, Enzo, y Eduardo Ruiz. 1970. «Conflicto político y estructura social». En *Chile, hoy*, Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 213-55.
- Gaudichaud, Franck. 2016. *Chile 1970-1973: mil días que estremecieron al mundo : poder popular, cordones industriales y socialismo durante el gobierno de Salvador Allende*. Santiago de Chile: Lom.
- Giusti Cordero, Juan. 2013. «La víspera del Golpe: un puertorriqueño en Santiago de Chile, julio-agosto de 1973». *80grados*. <http://beta.80grados.net/la-vispera-del-golpe-un-puertorriqueño-en-santiago-de-chile-julio-agosto-de-1973/> (14 de noviembre de 2019).
- Kergoat, Jacques. 2008. «Bajo los adoquines...la huelga». En *1968: el mundo pudo cambiar de base*, Madrid: Catarata, 57-103.
- Lira Massi, Eugenio. 1969. «'Condorito' y la CUT». *Clarín*: 3.
- Marín, Juan Carlos. 1973. *Las tomas, 1970/72: estudio sobre las ocupaciones rurales en Chile*. Santiago de Chile: Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales.
- Morris, David J. 1973. *We Must Make Haste-Slowly: The Process of Revolution in Chile*. New York: Vintage Books.
- del Pozo, José. 1992. *Rebeldes, reformistas y revolucionarios : una historia oral de la izquierda chilena en la época de la Unidad Popular*. Santiago de Chile: Documentas.
- Pozo Mayorga, Cristián. 2013. «Orientaciones del Movimiento obrero en Chile. Unidad sindical, antagonismo y reflujo (1952 - 1957) (Tesis para optar al grado de Maestro en Estudios Públicos y Sociales)». Universidad Nacional Autónoma de México.
- Salazar Vergara, Gabriel. 2006. *Violencia política popular en las «grandes alamedas»: Santiago de Chile 1947-1987: una perspectiva histórico-popular*. Santiago de Chile: Lom.
- ———. 2014. *Movimientos sociales en Chile: trayectoria histórica y proyección política*. Santiago de Chile: Uqbar Editores.
- Schlotterbeck, Marian E. 2018. *Beyond the Vanguard: Everyday Revolutionaries in Allende's Chile*. Oakland, CA.: University of California Press.
- Seidman, Michael, y Miguel Ángel Pérez Pérez. 2018. *La revolución imaginaria París 1968: estudiantes y trabajadores en el mayo Francés*.
- Slatman, Melisa, Florencia Rodríguez, y Natalia Lascano. 2009. «Las Coordinadoras Interfabriles de Capital y Gran Buenos Aires (1975-1976): Un estado del arte». *Theomai* 19. <http://revista-theomai.unq.edu.ar/numero19/ArtSlatman.pdf>.

- Stallings, Barbara B. 1979. *Economic Development and Class Conflict in Chile: 1958-73*. Ann Arbor, Mich.: Univ. Microfilms Internat.
- Thielemann, Luis. 2018. «La rudeza pagana: sobre la radicalización del movimiento obrero en los largos sesenta. Chile, 1957 – 1970.» *Izquierdas* 44: 114-33.
- ———. 2019. «La perspectiva parcial: el movimiento obrero frente a la política salarial del gobierno de Frei Montalva, 1964-1967». *Economía y Política* 6(1): 85-116.
- Valenzuela, Arturo. 2013. *El quiebre de la democracia en Chile*. Santiago de Chile: Universidad Diego Portales.
- Vergara, Angela. 2008. *Copper Workers, International Business, and Domestic Politics in Cold War Chile*. University Park, Pa.: Pennsylvania State University Press.
- Winn, Peter. 2004. *Tejedores de la revolución: los trabajadores de Yarur y la vía chilena al socialismo*. Santiago de Chile: Lom.
- Wright, Steve. 2017. *Storming Heaven: Class Composition and Struggle in Italian Autonomist Marxism*. London: Pluto.
- Zapata, Francisco. 1974. *Las relaciones entre el movimiento obrero y el gobierno de Salvador Allende*. México D. F.: El Colegio de México.